Proceso selectivo por el turno de acceso libre, para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1

Primer ejercicio
Acceso: LIBRE

Idioma: castellano

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique

PRIMERA PARTE

1.- Señálese entre las siguientes afirmaciones cuál es FALSA conforme al texto de la Constitución Española:

a) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

c) Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

d) Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la reforma constitucional?

a) La aprobación de una reforma por el procedimiento ordinario exige, en todo caso, la disolución inmediata de las Cortes Generales y la celebración de elecciones.

b) Si no hubiera acuerdo entre el Congreso y el Senado sobre un proyecto de reforma constitucional tramitado por el procedimiento ordinario, bastará la aprobación por mayoría absoluta del Congreso para que la reforma quede definitivamente aprobada.

c) Aprobada una reforma constitucional por el procedimiento ordinario, el referéndum únicamente se celebrará cuando lo solicite, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

d) Las reformas que afecten al Título Preliminar podrán tramitarse indistintamente por el procedimiento ordinario o por el procedimiento agravado, según acuerden las Cortes Generales.

3.- Según el artículo 124 de la Constitución Española, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones:

a) Conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad y responsabilidad.
b) Por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
c) Por medio de órganos propios, conforme a los principios de independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad y jerarquía normativa.
d) Por medio de órganos ejecutivos que dependen funcionalmente del Poder ejecutivo y orgánicamente del Poder Judicial.

4.- Señálese la respuesta INCORRECTA a tenor de lo establecido en la Disposición Adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

a) Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
b) El Tribunal Constitucional resolverá las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas garantizadas por la disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas en el artículo 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal.
c) Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada.
d) Están legitimadas para plantear los conflictos en defensa de la autonomía foral de los Territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, mediante acuerdo adoptado al efecto, pero no las Diputaciones forales de dichos territorios.

5.- Conforme al artículo dieciocho de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuál de las siguientes opciones es correcta:

a) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

b) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Catedráticos y Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

c) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

d) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Catedráticos de Universidad, funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

6.- De acuerdo con lo previsto en el artículo setenta y seis de la Ley Orgánica 2/1979, del 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿en qué plazo podrá el gobierno impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas?

a) Dentro del mes siguiente a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegara a su conocimiento.

b) Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegara a su conocimiento.

c) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegara a su conocimiento.

d) No existe un plazo establecido.

7.- Según el artículo ochenta de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos:

a) De la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
b) De la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) De la Ley de Enjuiciamiento Civil.
d) De la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

8.- Señálese la respuesta INCORRECTA con relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en los términos de la Disposición final única de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo:

a) Le corresponde el ejercicio de las funciones de dicho mecanismo al Defensor del Pueblo.
b) Se prevé la creación de un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de tales funciones.
c) El Consejo Asesor será presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones.
d) La estructura, composición y funcionamiento se rigen por una ley específica.

9.- De acuerdo con el artículo quinto de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿qué afirmación es correcta?

a) En los casos de muerte, cese o incapacidad definitiva del Defensor del Pueblo cesarán los Adjuntos al Defensor del Pueblo.
b) En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al Defensor del Pueblo.
c) En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos y Asesores del Defensor del Pueblo.
d) Todas las anteriores son falsas.

10.- Según lo establecido en el artículo veinticinco de la Ley Orgánica 3/1981, del 6 de abril, del Defensor del Pueblo, cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos:

a) Lo pondrá en conocimiento del Fiscal General del Estado, en el plazo máximo de dos meses.
b) Lo pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.
c) Lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
d) Lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, en el plazo máximo de dos meses.

11.- Señálese cuál de las siguientes alternativas NO es correcta con relación a la exoneración de responsabilidad contable conforme al artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas:

a) Quedarán exentos de responsabilidad quienes actuaren en virtud de obediencia debida, siempre que hubieren advertido por escrito la imprudencia o ilegalidad de la correspondiente orden, con las razones en que se funden.
b) No se exigirá responsabilidad cuando el retraso en la rendición, justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas, siempre que el responsable así lo haya hecho constar por escrito.
c) Quedarán exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados en los términos en los que se establezca en la ley.
d) No se exigirá responsabilidad cuando el retraso en la rendición, justificación o examen de las cuentas y en la solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones específicas, siempre que el responsable así lo haya hecho constar por escrito y tenga el visto bueno del órgano encargado de ejercer la función de intervención.

12.- Conforme al artículo trece de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, señale la opción correcta. El Informe o Memoria Anual se extenderá, entre otros, a alguno de los siguientes extremos:

a) La observancia de las Leyes reguladoras de los Ingresos y Gastos del sector público.
b) El cumplimiento de las previsiones y la ejecución de los Presupuestos de las Corporaciones de Derecho Público.
c) La racionalidad en la ejecución del gasto público basada en criterios de equidad y solidaridad financiera.
d) La ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles públicas autonómicas.

13.- De conformidad con la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas?

a) La responsabilidad contable solo podrá exigirse cuando concurran simultáneamente dolo, enriquecimiento injusto y menoscabo de fondos públicos.
b) La jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como con la actuación de la jurisdicción penal, sin que ello suponga duplicidad de responsabilidad contable.
c) Las resoluciones dictadas en el ejercicio de la jurisdicción contable únicamente son recurribles ante el propio Tribunal de Cuentas, al ser este el órgano supremo en dicha materia.
d) La responsabilidad contable tiene naturaleza exclusivamente disciplinaria y solo puede exigirse a quienes tengan la condición de funcionario público.

14.- Según el artículo tercero de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, los reglamentos dictados por el Tribunal de Cuentas sobre su propio funcionamiento y organización deberán:

a) Ser aprobados por el Congreso de los Diputados. Se Publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
b) Ser aprobados por los Consejeros de Cuentas, autorizados por la Secretaría General.
c) Ser aprobados por la Comisión de Gobierno y se remitirán al Parlamento para su publicación.
d) Ser aprobados por el Pleno y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, autorizados por su Presidente.

15.- De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en su redacción vigente tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, ¿en cuál de los siguientes casos puede prescindirse de la consulta pública previa?

a) Cuando la propuesta normativa carezca de impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
b) Cuando la propuesta normativa regule aspectos parciales de una materia y cuente con informe favorable del Consejo de Estado.
c) Cuando la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica y haya sido informada por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
d) Cuando la propuesta normativa tenga carácter técnico y su contenido venga impuesto por el Derecho de la Unión Europea.

16.- Tal y como establece el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, respecto del Gobierno en funciones, señale la respuesta correcta.

a) El Gobierno en funciones podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado cuando concurran razones de extraordinaria y urgente necesidad.
b) El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, limitando su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique.
c) El Gobierno en funciones podrá plantear la cuestión de confianza al Congreso de los Diputados cuando la estabilidad institucional así lo aconseje.
d) El Gobierno en funciones podrá proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras cuando exista bloqueo parlamentario.

17.- Según el artículo 18 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán:

a) Exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes y los acuerdos adoptados.

b) Exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

c) Los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, los puntos principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración y los acuerdos adoptados.

18.- Señálese la respuesta FALSA con relación a lo previsto para los entes locales de Galicia en el artículo 49 del Estatuto de autonomía para Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril):

a) Corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la tutela financiera sobre los entes locales respetando la autonomía que a los mismos reconocen la Constitución y el propio Estatuto.

b) Gozarán del tratamiento fiscal que la ley establezca para el Estado.

c) Los ingresos de los entes locales de Galicia, consistentes en participación en ingresos estatales y en subvenciones incondicionadas, se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales que se establezcan para las referidas participaciones.

d) Es competencia de los entes locales de Galicia la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos propios que les atribuyan las leyes, sin perjuicio de la delegación que puedan otorgar para estas facultades a favor de la Comunidad Autónoma gallega.

19.- De acuerdo con la estricta literalidad del artículo 10.1 del Estatuto de autonomía para Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), son funciones del Parlamento:

a) Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Diputados representantes de la Comunidad Autónoma Gallega.

b) Interponer cuestiones de inconstitucionalidad.

c) Aprobar el Reglamento del propio Parlamento de Galicia.

d) Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de ley.

20.- Según el artículo 12 del Estatuto de autonomía para Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), el Reglamento del Parlamento que regulará su composición, régimen y funcionamiento se aprobará por:

a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de tres quintos.
d) Mayoría de dos tercios.

21.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Estatuto de autonomía para Galicia (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril), señale la respuesta INCORRECTA sobre la emisión de deuda pública de la Comunidad Autónoma:

a) La emisión se hará mediante acuerdo del Parlamento.
b) Podrá emitir deuda pública para financiar gastos de inversión.
c) Podrá emitir deuda pública para financiar gastos corrientes.
d) Los títulos emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos.

22.- Indíquese la respuesta INCORRECTA con relación a las prerrogativas del Presidente o Presidenta de la Xunta en razón a su cargo, atendiendo al artículo 11 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia:

a) Tendrá derecho a recibir con carácter vitalicio el tratamiento de ilustrísimo señor y los honores protocolarios y las precedencias establecidas en la legislación vigente y en la que, en su caso, dicte la Comunidad Autónoma.
b) Tendrá derecho a que le sean rendido los honores que le correspondan con arreglo a lo que se establece en la legalidad vigente y lo que acuerde la Comunidad Autónoma.
c) Tendrá derecho a utilizar la bandera de Galicia como guion.
d) Tendrán derecho a percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta de Galicia.

23.- Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1/1983, del 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia. La responsabilidad política del Presidente de la Xunta ante el Parlamento será exigible:

a) En los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía.
b) En los términos establecidos en el Reglamento de la Cámara.
c) En los términos establecidos en la Ley 1/1983, del 22 de febrero.
d) En los términos establecidos en la Ley 8/1985, del 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia.

24.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia, ¿se establece alguna excepción que exima de la celebración del debate anual de Política general?

a) No, en ningún caso.
b) Si, cuando concurra ese mismo año una moción de censura.
c) Si, cuando así lo establezca el Parlamento por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros.
d) Si, cuando en el mismo año la Cámara haya investido al presidente o a la presidenta de la Xunta de Galicia.

25.- Conforme al artículo 29 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, un partido, federación o coalición que haya obtenido representación en las anteriores elecciones al Parlamento de Galicia y haya alcanzado entre el 5 y el 15 por 100 del total de votos válidos emitidos en la Comunidad Autónoma tendrá derecho a un tiempo gratuito de propaganda electoral en la TVG de:

a) Diez minutos.
b) Veinte minutos.
c) Treinta minutos.
d) Cuarenta y cinco minutos.

26.- El artículo 14 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia establece que serán miembros de la Junta Electoral de Galicia profesores universitarios. Señálese la opción INCORRECTA con relación a su participación en dicho órgano:

a) Serán cuatro vocales y deben ser profesores de las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas o de Sociología.
b) Se designarán a propuesta conjunta de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Parlamento.
c) Si la propuesta de designación no tiene lugar en los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento, la Mesa del Parlamento, oídas las fuerzas políticas presentes en la Cámara, procederá a su designación, en consideración a la representación existente en ella.
d) Podrán ejercer la vicepresidencia de la Junta Electoral.

27.- Según lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia:

a) Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad.
b) Las causas de inelegibilidad únicamente producen efectos hasta el momento de la proclamación de electos.
c) Las causas de incompatibilidad solo serán apreciables una vez adquirida plenamente la condición de diputado.
d) Todas son falsas.

28.- Según el artículo 23 de la Ley 8/1985, de 13 de agosto, de elecciones al Parlamento de Galicia, una vez presentadas las candidaturas electorales:

a) No podrán ser objeto de modificación, salvo en el caso de fallecimiento del titular, operándose automáticamente la subsanación por el orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa.
b) No podrán ser objeto de modificación, salvo en el plazo establecido para la subsanación de irregularidades y sólo por fallecimiento o renuncia del titular, operándose automáticamente la subsanación por el orden de los suplentes, salvo que el representante dijese otra cosa.
c) Podrán ser objeto de modificación en el plazo establecido por la correspondiente Junta Electoral Provincial, mediante solicitud motivada presentada por el representante.
d) No podrán ser objeto de modificación, salvo exclusivamente para la subsanación de irregularidades o por fallecimiento del titular.

29.- De acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, ¿qué afirmación es más fiel a la literalidad del precepto?

a) Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en un plazo de quince días, el Pleno del Parlamento para que proceda a la elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de la mayoría de los miembros del Parlamento.
b) Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en un plazo no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento para que proceda a la elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento.
c) Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en un plazo no inferior a quince días, el Pleno del Parlamento para que proceda a la elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.
d) Propuesto el candidato o candidatos, se convocará, en un plazo no inferior a veinte días, el Pleno del Parlamento para que proceda a la elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

30.- Según el artículo 6 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, el Valedor do Pobo, indique la INCORRECTA:

a) No recibirá instrucciones de ninguna autoridad, salvo del Tribunal Constitucional.
b) No estará sujeto a mandato imperativo alguno.
c) Desempeñará sus funciones con autonomía.
d) Desempeñará sus funciones según su criterio.

31.- El informe extraordinario al que se refiere el artículo 36 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, ¿ante qué órgano se podrá presentar?

a) A la Diputación Permanente del Parlamento si éste no estuviese reunido o se encontrase disuelto.
b) A la Mesa del Parlamento, en todo caso.
c) Ante la Junta de Portavoces con carácter previo a su remisión a la Mesa.
d) Todas son falsas.

32.- Cuando, en virtud de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, un funcionario fuera requerido en el marco de una queja presentada en relación a la función que desempeña, se responderá por escrito, ¿en qué plazo?

a) Responderá el afectado en el plazo que le fuera fijado, que en ningún caso será inferior a quince días.
b) Responderá el afectado en el plazo que le fuera fijado, que en ningún caso será inferior a diez días.
c) Responderá el superior jerárquico en el plazo que le fuera fijado, que en ningún caso será inferior a quince días.
d) Responderá el superior jerárquico en el plazo que le fuera fijado, que en ningún caso será inferior a diez días.

33.- Según el artículo 37 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, en su informe anual, el Valedor do Pobo:

a) Dará cuenta al Parlamento de la gestión realizada, que se presentará en el plazo máximo que le fuera fijado.
b) Incluirá un anexo, que será expuesto oralmente ante el Pleno del Parlamento, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el período que corresponda.
c) Dará cuenta del número de quejas presentadas, de aquellas que fueron rechazadas y sus causas, así como los datos identificativos de los interesados en el procedimiento investigador.
d) En los casos especialmente graves, podrá destacar la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora a su labor de cualesquiera organismos, funcionarios o personas al servicio de la Administración Pública, en su ámbito de competencias.

34.- A tenor del artículo 21.5 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, los informes emitidos por la sección de Estudios e Informes del Consello Consultivo:

a) Se publicarán transcurridos sesenta días desde su aprobación, salvo cuando la Administración que formule la consulta solicite expresamente que no sean objeto de publicación.
b) Se publicarán transcurrido un mes desde su aprobación, salvo cuando la Administración que formule la consulta solicite expresamente que no sean objeto de publicación.
c) Se publicarán transcurrido un mes desde su aprobación, aunque la Administración que formule la consulta solicite expresamente que no sean objeto de publicación.
d) Se publicarán transcurridos sesenta días desde su aprobación, aunque la Administración que formule la consulta solicite expresamente que no sean objeto de publicación.

35.- Según el artículo 27 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, la comunicación y remisión de informes, propuestas normativas y dictámenes elaborados por el Consello Consultivo:

a) Se realizará preferentemente a través de medios electrónicos, conforme a la legislación general del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico de las administraciones públicas, así como la reguladora de la utilización de medios electrónicos por el sector público.
b) Se realizará preferentemente a través de medios electrónicos, cuando sus destinatarios sean personas físicas y necesariamente a través de medios electrónicos cuando sus destinatarios sean órganos colegiados o personas jurídicas.
c) Se realizará a través de medios electrónicos, conforme a la legislación general del procedimiento administrativo común y del régimen jurídico de las administraciones públicas, así como la reguladora de la utilización de medios electrónicos por el sector público.
d) Se realizará a través de medios electrónicos, salvo cuando el destinatario sea una persona física residente en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea.

36.- Según el artículo 13 de la Ley 3/2014, del 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, ¿cuál de los siguientes dictámenes tendría carácter preceptivo?

a) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 30.000 euros para la Administración autonómica y a 15.000 euros para las administraciones locales.
b) Modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico regulados por ley, cuando tuvieran por objeto una diferente zonificación en el uso urbanístico del suelo rústico especial, en los espacios libres y las zonas verdes destinados a dominio público del plan.
c) Anteproyectos de ley elaborados por el Consello de la Xunta.
d) Conflictos de atribuciones que se planteen entre diversas consellerías, entre la Administración general de la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas de Galicia o entre las entidades locales de Galicia.

37.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 3/2014, del 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, cuando un acto administrativo, disposición o proyecto normativo se apruebe apartándose del dictamen emitido preceptivamente por el Consello Consultivo, contendrá la siguiente la fórmula:

a) Visto por el Consello Consultivo.
b) Oído el Consello Consultivo.
c) No conforme con el Consello Consultivo.
d) Previo dictamen del Consello Consultivo.

38.- Según el artículo 5 de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia, el cese de las consejeras y consejeros del Consello Consultivo de Galicia:

a) En todos los supuestos será decretado por el Consello de la Xunta, previa aceptación de la renuncia por la Presidencia del Consello Consultivo y apreciación de las restantes causas del cese por el Pleno del Consello Consultivo.
b) Por renuncia, será decretado por el Consello de la Xunta, previa aceptación por la Presidencia de la Xunta de Galicia.
c) En los supuestos de incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave de los deberes del cargo, será decretado por la Presidencia de la Xunta, por propuesta del Pleno del Consello Consultivo.
d) En los supuestos de incumplimiento grave de los deberes del cargo, así como al resultar condenado por delito doloso en el ejercicio del cargo, será decretado por la Presidencia de la Xunta, por propuesta del Pleno del Consello Consultivo.

39.- Señálese cuál de las siguientes afirmaciones NO está prevista en el preámbulo de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística:

a) El proceso histórico centralista acentuado con el paso de los siglos, ha tenido para Galicia dos consecuencias profundamente negativas: anular la posibilidad de constituir instituciones propias e impedir el desarrollo de nuestra cultura genuina cuando la imprenta iba a promover el gran despegue de las culturas modernas.
b) Sometido a esta despersonalización política y a esta marginación cultural, el pueblo gallego padeció una progresiva depauperación interna.
c) La lengua es la mayor y más original creación colectiva de los gallegos, es la verdadera fuerza espiritual que le da unidad interna a nuestra comunidad.
d) La ley garantiza la prioridad del gallego como lengua oficial de Galicia y asegura la normalización del gallego como lengua propia de nuestro pueblo.

40.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, qué afirmación es correcta:

a) Los documentos públicos otorgados en Galicia se podrán redactar en gallego o castellano. De no haber acuerdo entre las partes, se emplearán ambas lenguas.
b) Los documentos públicos otorgados en Galicia se podrán redactar en gallego o castellano. De no haber acuerdo entre las partes, se empleará el castellano.
c) Los documentos otorgados en Galicia se podrán redactar en gallego o castellano. De no haber acuerdo entre las partes, se emplearán ambas lenguas.
d) Los documentos públicos otorgados en Galicia se podrán redactar en gallego o castellano. De no haber acuerdo entre las partes, se empleará el gallego.

41.- De acuerdo con la disposición adicional de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, qué afirmación es correcta:

a) En las cuestiones relativas a la normativa, actualización y uso correcto de la lengua gallega, se estimará como criterio de autoridad el establecido por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
b) En las cuestiones relativas a la normativa, actualización y uso correcto de la lengua gallega, se estimará como criterio de autoridad el establecido por el Instituto da Lingua Galega.
c) En las cuestiones relativas a la normativa, actualización y uso correcto de la lengua gallega, se estimará como criterio de autoridad el establecido por la Real Academia Gallega.
d) Todas las anteriores son falsas.

42.- Según el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado, conocerá/conocerán en única instancia:

a) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

43.- Conforme al artículo 58 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿de qué plazo se dispone para formular alegaciones previas?

a) No existe un plazo, pueden ser evacuadas hasta que el pleito quede concluso y visto para sentencia.
b) Veinte días, a partir de la remisión del expediente administrativo.
c) Dentro de los cinco primeros días de los veinte para contestar a la demanda.
d) Para la parte demandante, veinte días, a partir de la remisión del expediente administrativo. Para la parte demandada, los cinco primeros días de los veinte para contestar a la demanda.

44.- Señálese la opción INCORRECTA con relación a las personas o entidades legitimadas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme al artículo 19 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa:

a) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como los de Organismos públicos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

b) Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las personas afectadas y siempre que cuenten con su autorización expresa, estarán también legitimados los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales de personas trabajadoras autónomas, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

c) Los sindicatos estarán legitimados para actuar, en nombre del interés del personal funcionario y estatutario afiliado a ellos que así lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, recayendo sobre dichos afiliados los efectos de aquella actuación.

d) Las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, además de la persona acosada, en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

45.- Conforme al artículo 118 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuál es el plazo para formalizar demanda en los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de las personas:

a) Ocho días.
b) Diez días.
c) Veinte días.
d) Cinco días.

46.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 78.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, qué asuntos se tramitan por el procedimiento abreviado?

a) Asuntos de disciplina deportiva.
b) Impugnación de actos y disposiciones de las Corporaciones Locales.
c) Cuestiones de personal relativas al nacimiento de la relación de servicios de funcionarios de carrera.
d) Inadmisión de peticiones de asilo político.

47.- Señale cuál de los siguientes criterios NO es correcto, conforme al art. 16 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, con relación a la distribución del importe del Fondo de Compensación Interterritorial:

a) La inversa de la renta por habitante.
b) La tasa de población emigrada en los últimos quince años.
c) El porcentaje de desempleo sobre la población activa.
d) La superficie territorial.

48.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en relación con las tasas:

a) El rendimiento previsto para cada tasa por la prestación de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades.
b) Para la fijación de las tarifas de las tasas no podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica.
c) Las Comunidades Autónomas no podrán establecer tasas por la utilización de su dominio público.
d) Las Comunidades Autónomas no podrán establecer tasas por la realización de actividades en régimen de Derecho Público de su competencia.

49.- Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, respecto de los tributos cedidos, sin perjuicio de los requisitos específicos que establezca la Ley de cesión (señale la INCORRECTA):

a) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una Comunidad Autónoma se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.
b) Cuando los tributos cedidos sean de naturaleza inmobiliaria, su atribución a una Comunidad Autónoma se realizará en función del domicilio de los bienes inmuebles, salvo en el gravamen de adquisiciones intervivos, en el que se atenderá al del comprador.
c) Cuando los tributos cedidos graven el consumo, su atribución a las Comunidades Autónomas se llevará a cabo bien en función del lugar de consumo, bien en función del lugar en el que el vendedor realice la operación a través de establecimientos, locales o agencias, bien en función de los consumos calculados sobre una base estadística.
d) Cuando los tributos cedidos graven operaciones inmobiliarias, su atribución a las Comunidades Autónomas se realizará en función del lugar donde radique el inmueble.

50.- Señale la repuesta correcta respecto del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas.

a) Es un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas integrado exclusivamente por la persona titular del Ministerio de Hacienda y por las personas titulares de las consejerías competentes en materia de hacienda de las comunidades autónomas.
b) Es el órgano competente para aprobar definitivamente el sistema de financiación autonómica y sus modificaciones, siendo sus acuerdos vinculantes para las Cortes Generales.
c) Es el órgano de coordinación entre la actividad financiera de las comunidades autónomas y de la Hacienda del Estado, al que corresponde conocer, entre otras materias, la coordinación de la política de endeudamiento y los criterios generales de distribución de los recursos financieros.
d) Sus acuerdos se adoptarán, en todo caso, por unanimidad de sus miembros.

SEGUNDA PARTE

51.- Según el artículo 31 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que se produzca el incremento de los créditos derivado (señálese la INCORRECTA):

a) De una generación, ampliación o incorporación de crédito.
b) De una transferencia de crédito, si el procedimiento de concesión de la subvención es el previsto en el artículo 19.2 de la misma Ley.
c) De un suplemento de crédito originado conforme a la normativa de la Unión Europea.
d) De la existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.

52.- Señálese la afirmación FALSA con relación a la invalidez de la resolución de la concesión conforme al artículo 32 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia:

a) Es causa de nulidad de la resolución de la concesión la carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
b) Cuando el acto de concesión de la subvención incurriera en causa de nulidad o anulabilidad, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en la normativa general del Derecho Administrativo.
c) La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
d) Procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en la Ley de subvenciones de Galicia.

53.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, no podrán obtener la condición de beneficiarios:

a) Aquellas personas físicas o jurídicas que fueran condenadas por sentencia firme por la comisión de cualesquiera delitos contra la Administración Pública.
b) Aquellas personas físicas o jurídicas que hubieren dado lugar a la resolución firme de un contrato celebrado con la Administración.
c) Aquellos que no se encuentren al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
d) Todas las alternativas son ciertas.

54.- Conforme al artículo 39 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, la retención de pagos:

a) Debe levantarse en el plazo máximo de dos meses.
b) Puede adoptarse, aunque pueda producir efectos de difícil o imposible reparación.
c) Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir.
d) Debe mantenerse hasta que la resolución gane firmeza.

55.- Según el artículo 4 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, en aquellos casos en los que la finalidad de la subvención se refiera a la promoción del ahorro y a la eficiencia energética y/o al fomento de las energías renovables, será necesario un informe previo de las bases reguladoras de la consellería con competencias en materia de energía, que lo realizará a través del Instituto Energético de Galicia:

a) Este informe se emitirá en el plazo de quince días.
b) Este informe se emitirá en el plazo de un mes, y se entenderá desfavorable de no emitirse en dicho plazo.
c) Este informe se emitirá en el plazo de diez días, y se entenderá favorable de no emitirse en dicho plazo.
d) Este informe se emitirá en el plazo de siete días, y se entenderá favorable de no emitirse en dicho plazo.

56.- De conformidad con la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, respecto de las aportaciones dinerarias sin contraprestación realizadas por los entes vinculados o dependientes de la Xunta de Galicia que no se encuentran comprendidos en el artículo 3.1:

a) Les resulta íntegramente aplicable la Ley 9/2007, salvo las especialidades previstas reglamentariamente.
b) Les son aplicables exclusivamente los principios de gestión del artículo 5.2 y las obligaciones de información del artículo 16.
c) Quedan totalmente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 9/2007.
d) Únicamente les resulta aplicable el régimen de reintegro previsto en el título II.

57.- Según el artículo 23 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, en relación con la resolución de los procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva:

a) La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, podrá hacer constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá sobrepasar los seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo máximo o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.
c) La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
d) El vencimiento del plazo máximo de seis meses sin que sea notificada la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

58.- El artículo 103 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia prevé, con relación a las formas de venta de los elementos del patrimonio, la posible adjudicación directa en diversos supuestos, entre los que está la transmisión de fincas rústicas que no lleguen a la unidad mínima de cultivo. Con relación a ellas, se establece un régimen jurídico en la que el precepto mencionado NO incluye que:

a) Para poder realizar la adjudicación directa, la venta debe realizarse a una propietaria o propietario limítrofe.
b) Cuando concurran varias personas interesadas con igual derecho, se resolverá a favor del mejor postor, sin perjuicio del posterior derecho de retracto regulado en el Código civil.
c) En caso de acuerdo, la venta podrá efectuarse mediante un prorrateo entre ellos.
d) En los casos de venta directa, el importe de la garantía será equivalente al cincuenta por ciento del precio de tasación del bien o derecho, excepto en las ventas con pago aplazado reguladas en el artículo 109. No se requerirá la constitución de garantía cuando el valor del bien no exceda de mil quinientos euros.

59.- Señálese la afirmación INCORRECTA con relación al régimen jurídico de las retrocesiones de bienes, conforme a los artículos 87 y 88 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Podrá acordarse la retrocesión de bienes y derechos adscritos cuando se incumplieran las condiciones de la adscripción.
b) Las retrocesiones de bienes y derechos adscritos a la Comunidad Autónoma serán acordadas por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio.
c) El reconocimiento de la reversión o retrocesión lleva implícita la desafectación del bien o derecho, en caso de que tuviese la condición de dominio público.
d) Reconocida la reversión o retrocesión se procederá, en su caso, a levantar un acta entre la persona interesada y la persona representante de la consellería o entidad pública instrumental que corresponda, la cual, a instancia de la persona interesada, podrá elevarse a escritura pública.

60.- Conforme al artículo 138 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, señale qué afirmación es la correcta:

a) Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración general pueden ser cedidos a entidades sin ánimo de lucro, para la realización de fines de utilidad pública o interés social.
b) La cesión solo puede tener por objeto la propiedad del bien o derecho.
c) Las cesiones de vehículos a terceros solo podrán tener por objeto su uso.
d) Cuando la cesión tuviese por objeto la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales, podrán ser cesionarios cualquier persona física o jurídica.

61.- De acuerdo con la exclusiva literalidad del artículo 2.5 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, son bienes patrimoniales:

a) Los contratos de arrendamiento.
b) Los contratos de futuros y las opciones con un activo subyacente constituido por acciones o participaciones en sociedades mercantiles.
c) Los derechos de propiedad intelectual.
d) Los bienes y derechos adquiridos a título de sucesión testada.

62.- Según el artículo 40 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) El uso común especial está sujeto a autorización si su duración es superior a cuatro años o se efectúa con obras o instalaciones fijas.
b) El uso privativo está sujeto a autorización cuando la ocupación se efectuara principalmente con instalaciones desmontables o bienes muebles.
c) El uso privativo está sujeto a autorización si su duración inicial no fuera superior a cuatro años.
d) Todas las anteriores son falsas.

63.- De acuerdo con el artículo 146 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, qué afirmación es correcta:

a) La renuncia o abdicación de derechos sobre bienes de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades públicas instrumentales deberá ser aprobada por la consellería titular o el órgano de gobierno de la entidad pública instrumental, con las excepciones previstas en la presente ley.

b) La renuncia de derechos sobre bienes de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades públicas instrumentales deberá ser aprobada por el Consello da Xunta a propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio o de la consellería de adscripción de la entidad pública instrumental. La Ley no contempla la figura de la abdicación.

c) La renuncia o abdicación de derechos sobre bienes de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades públicas instrumentales deberá ser aprobada por el Consello da Xunta a propuesta de la consellería competente en materia de patrimonio o de la consellería de adscripción de la entidad pública instrumental, con las excepciones previstas en la presente ley.

d) La Ley no prevé la renuncia o abdicación sobre bienes de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades públicas instrumentales.

64.- Según el artículo 11 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, la desafectación de los bienes inmuebles y los derechos sobre estos demaniales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia será acordada mediante:

a) Decreto.

b) Resolución.

c) Ley.

d) Orden.

65.- Conforme al artículo 43 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, la ocupación por terceros de espacios en edificios administrativos del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia puede admitirse:

a) Cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación de espacios necesarios para los servicios administrativos.
b) Únicamente cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos y al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos.
c) Cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos y al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para la explotación marginal de espacios no necesarios para los servicios administrativos.
d) Cuando se efectúe para dar soporte a servicios dirigidos al personal destinado en ellos y al público visitante, como cafeterías, oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas postales u otros análogos, o para el desarrollo de la actividad de organizaciones sin ánimo de lucro.

66.- Atendiendo a lo previsto en el artículo 109 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, sobre el pago aplazado del precio de venta de los bienes o derechos, señale la INCORRECTA:

a) El órgano competente para la venta de los bienes o derechos puede admitir el pago aplazado del precio de venta, por un periodo no superior a ocho años.
b) La garantía será equivalente al veinticinco por ciento de la cuantía a pagar en la primera anualidad.
c) Los pagos deberán realizarse en el plazo de veinte días naturales, tomando como referencia a efectos de cómputo el día y mes de firma de la mencionada resolución.
d) Una vez realizado el primer pago, los siguientes se efectuarán con periodicidad mensual o anual, en función de lo que se estableciese en la resolución de venta.

67.- De conformidad con lo establecido en la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, de patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, sobre el patrimonio empresarial:

a) La utilización por una sociedad mercantil pública autonómica de bienes de la Administración general requiere necesariamente la previa aportación de dichos bienes a la sociedad conforme al artículo 177.
b) La aportación de bienes patrimoniales a una sociedad mercantil pública autonómica corresponde acordarla a la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio, previo informe de la consellería interesada.
c) Las entidades públicas empresariales ajustarán la gestión de su patrimonio en materia de bienes demaniales a las disposiciones reguladoras de estos bienes.
d) Tanto la aportación como la utilización de bienes exigen, en todo caso, informe de expertos independientes conforme a la legislación mercantil.

68.- Según el artículo 46 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, cualquiera que fuese el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la concesión demanial, debe procederse:

a) A su formalización en documento administrativo suscrito entre el órgano competente para su otorgamiento y el concesionario o la concesionaria.
b) A su publicación en el diario oficial de la administración otorgante.
c) A la resolución de la correspondiente autorización y publicación en el diario oficial de la administración otorgante.
d) A la formalización del correspondiente contrato administrativo.

69.- A tenor de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la creación de entidades públicas instrumentales integrantes del sector público autonómico, salvo los consorcios, requiere autorización por ley, cuyo anteproyecto irá acompañado de una memoria en la que se precisarán diversos aspectos. De entre los señalados a continuación hay uno ERRÓNEO. Indíquese cuál:

a) El objetivo y fines que se persiguen con la creación de la entidad propuesta.
b) El tipo de entidad y su justificación.
c) Las consecuencias organizativas de la creación de la entidad propuesta y, en particular, su incidencia sobre las funciones y competencias de otros órganos o entidades preexistentes.
d) Los recursos que garanticen la viabilidad económico-financiera de la entidad propuesta, previo informe favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

70.- De acuerdo con la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, señale qué afirmación es correcta:

a) En ningún caso será delegable la competencia para resolver los recursos.
b) La delegación deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
c) La encomienda de gestión se podrá llevar a cabo entre órganos pertenecientes a distintas administraciones y entidades públicas, cuando este último lo haga a título gratuito, entre otros requisitos.
d) Todas las alternativas son ciertas.

71.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 16/2010, del 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:

a) La Xunta de Galicia podrá participar en el capital de las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su forma u objeto social, cuando el Consello da Xunta, previo informe de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, lo estime conveniente para el cumplimiento de finalidades concretas de política económica. Salvo lo dispuesto por normas especiales, la participación de la Xunta no será inferior al 20% ni superior al 50% del capital social de dichas sociedades.
b) La Xunta de Galicia podrá participar en el capital de las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su forma u objeto social, cuando el Consello da Xunta, previo informe de la Consellería de Hacienda, lo estime conveniente para el cumplimiento de finalidades concretas de política económica. Salvo lo dispuesto por normas especiales, la participación de la Xunta no será inferior al 10% ni superior al 50% del capital social de dichas sociedades.
c) La Xunta de Galicia podrá participar en el capital de las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su forma u objeto social, cuando el Consello da Xunta, previo informe de la Consellería de Hacienda, lo estime conveniente para el cumplimiento de finalidades concretas de política económica. Salvo lo dispuesto por normas especiales, la participación de la Xunta no será inferior al 10% ni superior al 40% del capital social de dichas sociedades.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

72.- De conformidad con los artículos relativos a la delegación de competencias, la avocación y la delegación de firma de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:

a) La delegación de firma supone la cesión del ejercicio de la competencia y produce los mismos efectos que la delegación de competencias.
b) La avocación que sea acordada por un miembro de la Xunta de Galicia, deberá ser puesta también en conocimiento del superior jerárquico del órgano convocante.
c) Las resoluciones dictadas por delegación de competencias se consideran adoptadas por el órgano delegante, mientras que la delegación de firma no altera la competencia del órgano firmante.
d) La delegación de competencias no será revocable.

73.- Señale la respuesta INCORRECTA respecto de las Sociedades mercantiles públicas autonómicas previstas en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:

a) Cualquiera que sea su forma jurídica se rigen por el ordenamiento jurídico privado.
b) En los estatutos de las sociedades mercantiles autonómicas debe constar expresamente que en los casos de transformación, fusión, escisión y disolución se requiere autorización previa del Consello da Xunta.
c) Son sociedades mercantiles públicas autonómicas aquellas en cuyo capital social sea mayoritaria la participación directa o indirecta de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) Respecto a la tutela funcional será preciso acuerdo expreso para los cambios de adscripción que sean consecuencia de los procesos de reestructuración de su patrimonio empresarial.

74.- Según el artículo 24 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:

a) No podrán crearse órganos o unidades administrativas que ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración general de la Comunidad Autónoma lo haga necesario, podrán crearse órganos o unidades administrativas que ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito territorial estatal. No podrán crearse órganos o unidades administrativas en el exterior.
c) Cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración general de la Comunidad Autónoma lo haga necesario, podrán crearse órganos o unidades administrativas que ejerzan su competencia funcional fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto en el ámbito territorial estatal como en el exterior.
d) Cuando el desarrollo de competencias propias de la Administración general lo haga necesario, podrán crearse unidades administrativas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto en el ámbito territorial estatal como en el exterior, que dependerán funcionalmente de los órganos centrales o territoriales que se determinen.

75.- Según el artículo 41 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, podrá prescindirse del trámite de consulta pública previa:

a) Cuando la propuesta se someta a audiencia de organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, que agrupen o representen los derechos e intereses legítimos de determinados grupos o sectores de la ciudadanía.
b) Cuando así se exceptúe por la escasa complejidad de la iniciativa normativa.
c) Cuando la persona titular del centro directivo que haya tenido la iniciativa declare urgente la propuesta.
d) Cuando la propuesta normativa no tenga impacto significativo en la actividad económica.

76.- Según el artículo 42 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, durante la fase intermedia del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, cuando el contenido y la repercusión de la disposición lo aconsejen, será sometida a información pública:

a) Durante un plazo razonable y no inferior a veinte días hábiles.
b) Durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles.
c) Durante un plazo razonable y no inferior a diez días hábiles.
d) Durante un plazo máximo de un mes.

77.- De acuerdo con el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, el pago de las obligaciones sólo será exigible a la Hacienda de la Comunidad en la medida que resulte:

a) De la ejecución de sus presupuestos.
b) De resolución judicial.
c) De cualesquiera negocios jurídicos válidos en derecho que las genere.
d) De instrumentos admitidos en el tráfico mercantil, tales como letras de cambio.

78.- El artículo 5 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia establece las materias que se regularán por Ley del Parlamento. Señale la INCORRECTA:

a) La creación y supresión de los organismos autónomos en los términos que se prevén en esta Ley.
b) El régimen y la concesión de avales y otras garantías por la Comunidad Autónoma.
c) Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y la concesión de créditos ordinarios de los organismos autónomos en los términos contemplados en esta Ley.
d) La emisión y el régimen de la deuda pública y demás operaciones de crédito.

79.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia (operaciones de endeudamiento), la cuantía de las anualidades de amortización, incluido capital e intereses, no podrá exceder del:

a) 25 por 100 de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
b) 50 por 100 de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
c) 30 por 100 de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.
d) 35 por 100 de los ingresos corrientes previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada año.

80.- Tal y como establece el artículo 55 bis del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿en qué secciones del presupuesto de la Xunta de Galicia se dotará un fondo (Fondo de Contingencia de Ejecución presupuestaria) para atender a las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter no discrecional y que no tuvieran en todo o en parte la adecuada dotación presupuestaria?

a) Secciones 20.01 y 23.
b) Secciones 50.02 y 22.
c) Secciones 20.02 y 22
d) Secciones 50.01 y 23.

81.- Según se establece en el Título VI "De las responsabilidades", del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia:

a) La responsabilidad de quien participe en la resolución o en el acto será solidaria, excepto cuando concurra dolo, en el que será mancomunada.
b) No rendir cuentas reglamentarias exigidas o presentadas con graves defectos no constituye una infracción que dé origen a la obligación de indemnizar.
c) En la tramitación del expediente se dará audiencia a los interesados y su resolución contendrá el pronunciamiento sobre los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de la Hacienda de la Comunidad, imponiéndoles a los responsables la obligación de indemnizar.
d) Cuando, a consecuencia de la insolvencia de los obligados que deben indemnizar, haya que proceder contra los responsables subsidiarios, los intereses serán exigidos desde la fecha de la resolución de declaración de la insolvencia.

82.- Según el artículo 91 bis del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, los depósitos y garantías en efectivo constituidos en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma respecto de los cuales no se realice ninguna gestión por parte de los interesados en el ejercicio de su derecho de propiedad prescribirán a favor de la Hacienda de la Comunidad Autónoma:

a) En el plazo de cuatro años.
b) En el plazo de cinco años.
c) En el plazo de veinte años.
d) En el plazo de treinta años.

83.- Conforme al artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el personal funcionario tendrá un permiso de:

a) Tres días hábiles.
b) Cuatro días hábiles.
c) Cinco días hábiles.
d) No tiene permiso en tal situación.

84.- Atendiendo al artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de dicha norma, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo con diversos principios. De entre los siguientes, señálese el INCORRECTO:

a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
b) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
c) El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de dicha ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

85.- ¿Cuál de los siguientes NO es un título competencial de los citados por el legislador como fundamento del Estatuto Básico del Empleado Público, a tenor de lo establecido en la Disposición Final Primera del texto refundido de dicha disposición?

a) El artículo 149.1.18.ª de la Constitución en cuanto a las bases del régimen estatutario de los funcionarios.
b) El artículo 149.1.7ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación laboral.
c) El artículo 148.1.2ª de la Constitución, por lo que se refiere a su aplicación en el ámbito local.
d) El artículo 149.1.13ª de la Constitución, en cuanto a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

86.- De acuerdo con la estricta literalidad del artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La pérdida de la nacionalidad.
b) La sanción disciplinaria de separación del servicio.
c) La pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
d) Todas las anteriores son falsas.

87.- Respecto de las juntas de personal como órganos de representación regulados en el artículo 39 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Son, junto con los Delegados de personal los órganos específicos de representación del personal funcionario.
b) Se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo máximo de 50 funcionarios.
c) Cada junta de personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente, correspondiendo el número de 17 a la escala de 501 a 750 funcionarios.
d) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal.

88.- Según el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en materia de negociación colectiva, señale cuál de las siguientes materias queda excluida de la obligatoriedad de la negociación:

a) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
b) Los criterios generales de acción social.
c) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

89.- Según el artículo 73 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas:

a) Podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

b) No podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen.

c) Podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, con la disminución proporcional, si es el caso, de retribuciones.

d) Podrán asignar a su personal responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin cambio en las retribuciones.

90.- Según el artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad:

a) En el supuesto de cese del puesto obtenido por concurso, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción.

b) En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción.

c) En los supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, acordará la adscripción del funcionario a otro puesto, con carácter definitivo.

d) El funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo en su Administración de origen en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de su cese.

91.- Señale, conforme a la Disposición Adicional primera de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, cuál de los siguientes NO se entiende como órgano estatutario a los efectos de dicha norma:

a) El Parlamento de Galicia.
b) El Consello da Cultura Galega.
c) El Consello Consultivo de Galicia.
d) El Consello de Contas.

92.- ¿Cuál de los siguientes es un supuesto de demérito aplicable como sanción de una infracción muy grave conforme al artículo 188 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia?

a) Prohibición de ocupar los puestos que reglamentariamente se determinen por un período de entre dos años y un día y cuatro años.
b) Imposibilidad de participar en procedimientos de provisión de puestos o de promoción interna por un período de entre seis meses y dos años.
c) Pérdida de un grado en el sistema de carrera horizontal y privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado por un período de entre seis meses y dos años.
d) Pérdida de tres grados en el sistema de carrera horizontal y privación del derecho a ser evaluado para el ascenso de grado por un período de entre dos años y un día y cuatro años.

93.- Conforme a la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

a) El nombramiento de personal funcionario interino puede producirse, entre otras razones, por el exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial, por un plazo máximo de seis meses dentro de un período de dieciocho meses.
b) La prestación de servicios en régimen interino constituye mérito preferente para la adquisición de la condición de funcionario de carrera.
c) El cese del personal interino se producirá por razones organizativas, con independencia de que se suprima o amortice el puesto asignado.
d) La fecha de finalización del nombramiento del personal funcionario interino docente no excederá el inicio del curso académico inmediatamente siguiente.

94.- De acuerdo con el artículo 192 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:

a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de seis meses, a contar desde la comisión de los hechos.
b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de un año.
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de seis meses, a contar desde la notificación del acuerdo de inicio.
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un procedimiento disciplinario es de dos años.

95.- ¿Qué límite máximo establece la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia en su artículo 48 para reservar plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público?

a) 3 %.
b) 7 %.
c) 12 %.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

96.- Respecto de la suspensión provisional de funciones establecida en el artículo 195 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia:

a) Como medida provisional en la tramitación de un expediente disciplinario no puede exceder de tres meses, salvo en el caso de paralización del procedimiento imputable a la persona interesada.
b) El tiempo de permanencia en suspensión provisional no será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.
c) Cuando la suspensión sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo.
d) Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir a la persona afectada la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

97.- Según el artículo 84 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el grado de cumplimiento de los deberes profesionales que esta ley impone a los empleados públicos:

a) Es un criterio que se tendrá en cuenta necesariamente para la valoración de la conducta profesional de los empleados públicos.
b) Es un criterio que se tendrá en cuenta necesariamente para la valoración del rendimiento anual de los empleados públicos.
c) Es un criterio que se tendrá en cuenta necesariamente para la valoración del logro de resultados por parte de los empleados públicos.
d) Se valorará por los responsables de las unidades administrativas.

98.- Según el artículo diecinueve de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, queda exceptuada del régimen de incompatibilidades:

a) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados exclusivamente a la formación de funcionarios, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año.
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año.
c) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de ciento cincuenta horas al año.
d) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de empleados públicos, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año.

99.- Señale cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA con relación al ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, atendiendo a su artículo segundo:

a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.
b) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 25 por 100.
c) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.
d) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

100.- Conforme al artículo cuarto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá autorizarse la compatibilidad al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, para el ejercicio de sus funciones:

a) A tiempo parcial en centros de titularidad pública o privada con oferta integrada.
b) A tiempo parcial en centros de titularidad pública con oferta integrada.
c) A tiempo parcial o completo en cualquier centro público con oferta integrada.
d) A tiempo parcial en cualquier centro que imparta docencia de formación profesional.

101.- Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas:

a) La superación de los límites, en cómputo anual, establecidos en el artículo 7, requiere en cada caso acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de especial interés para el servicio.
b) Los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto.
c) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas se inscribirán en los Registros de Compatibilidad correspondientes.
d) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas queda exceptuada del régimen de incompatibilidades.

102.- Según el artículo diez de Ley 53/1984, del 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público:

a) Cuando con arreglo a esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos en los diez primeros días del plazo de toma de posesión.
b) Si se tratara de puestos no susceptibles de compatibilidad, a falta de opción dentro del plazo establecido, se entenderá que optan por el nuevo puesto, quedando en situación de servicio en otras administraciones en el puesto que vinieran desempeñando.
c) Si se tratara de puestos no susceptibles de compatibilidad, a falta de opción dentro del plazo establecido, se entenderá que optan por el nuevo puesto, quedando en situación de excedencia forzosa en el que vinieran desempeñando
d) Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.

103.- Conforme a lo previsto en el artículo catorce de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿de qué plazo dispone el órgano responsable para emitir la declaración de compatibilidad o incompatibilidad de un segundo puesto en el sector público?

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Seis meses.

104.- Con relación a la composición del Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar, atendiendo al artículo 179 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, señálese cuál de las siguientes NO es correcta:

a) Tres personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito autonómico.
b) Tres personas en representación de las organizaciones pesqueras, marisqueras, acuícolas y del sector de la transformación y otras actividades relacionadas con la pesca en que las mujeres representen la mayoría de las personas trabajadoras del sector; particularmente, mariscadoras, rederas y las representantes del sector de la conserva, por ser las actividades en las que se registra un mayor peso y un mayor porcentaje femenino.
c) Dos personas designadas por la consellería competente en materia de medio rural relacionadas con los sectores profesionales en los que la presencia de mujeres es la mayoritaria y dos personas designadas por la consellería competente en materia de mar en representación del sector acuícola, el de la transformación o de otras actividades relacionadas con la pesca en las que las mujeres representen la mayoría de las personas trabajadoras del sector; en particular, las mariscadoras, las rederas y las representantes del sector de la conserva, entre otros.
d) Tres personas en representación de las entidades agrarias que forman parte del Consello Agrario Galego.

105.- Señale cuál de las siguientes NO es una función de la unidad administrativa de igualdad de la consellería con competencias en materia de empleo conforme al artículo 175 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia:

a) Controlar la legalidad de los convenios colectivos en los términos establecidos en la normativa de aplicación y solicitar los informes a la Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Negociación Colectiva, y realizar las comunicaciones previstas en el artículo 136.
b) Organizar, de manera coordinada con la Comisión Consultiva Autonómica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Negociación Colectiva y con el órgano de la Administración general de la Comunidad Autónoma competente en materia de igualdad, actividades de formación en igualdad por razón de género dirigidas a empresas, organizaciones empresariales, representaciones unitarias de trabajadores y trabajadoras y organizaciones sindicales.
c) Asesorar en materia de género a cualquier órgano de la consellería con competencias en materia de empleo y relaciones laborales y hacer recomendaciones a iniciativa propia, en especial en lo relacionado con las medidas de fomento de creación de empresas o con la contratación de mujeres con especiales dificultades de inserción laboral o en situaciones marcadas por la desventaja social, con la promoción profesional de mujeres a puestos de responsabilidad y con el estímulo de la participación de las mujeres en las profesiones tradicionalmente masculinas, así como la de hombres en profesiones tradicionalmente femeninas.
d) Diseñar la formación específica en materia de igualdad dirigida al personal de la consellería con competencias en materia de empleo y relaciones laborales, de acuerdo con las funciones de cada puesto de trabajo, y revisar los programas de formación dirigidos a dicho personal para introducir en ellos la perspectiva de género, favoreciendo una participación equilibrada de alumnas y alumnos y también la adecuación de los horarios y la ubicación de los cursos para respetar el derecho de conciliación.

106.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/2023, del 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de las mujeres y hombres de Galicia, la discriminación sufrida por una persona por razón del sexo, el embarazo, el parto o la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares o del estado civil de otra con la que estuviera relacionada, se trata de una:

a) Discriminación sexista por asociación.
b) Discriminación sexista por error.
c) Discriminación sexista múltiple e interseccional.
d) Discriminación por el ejercicio de los derechos de conciliación.

107.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a lo establecido en la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia:

a) Corresponde a la Consellería competente en materia de igualdad velar por la aplicación transversal de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo público.
b) La Administración autonómica elaborará periódicamente planes estratégicos contra la trata.
c) Iniciar, de oficio o a demanda de terceros, investigaciones sobre posibles situaciones de discriminación por razón de sexo que revistan una gravedad o relevancia especiales, excepto las que pudieran ser constitutivas de delito, es competencia del Valedor do Pobo.
d) Lo relativo a mujeres en situaciones de discriminación múltiple se aborda en el capítulo XI del Título II de la Ley.

108.- Según el artículo 6 de Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, se entiende por acoso sexual:

a) Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
c) Toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable.

109.- Atendiendo al artículo 2 del texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señálese cuál es la definición de inclusión social:

a) Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
b) Es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.
c) Es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.
d) Es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

110.- ¿Quiénes, según lo que establece el artículo 67 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, son susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades y por lo tanto los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en su beneficio?

a) Únicamente se aplicarán dichas medidas de acción positiva respecto de las familias con más de un miembro con discapacidad.
b) Personas de avanzada edad con discapacidad superior al 33%.
c) Las mujeres, los niños y las niñas.
d) La ley no distingue por raza, sexo o edad.

111.- Conforme al artículo 77 del texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Dicha norma NO resulta aplicable:

a) En los procesos penales, exclusivamente.
b) En los procesos penales y en los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.
c) En los procesos penales, en los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras o contra recargos por cumplimiento extemporáneo de las obligaciones legalmente establecidas.
d) En los procesos penales, en los civiles relacionados con la filiación, el estado civil y en los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras o restrictivas de derechos.

112.- Según el artículo 56 del texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Oficina de Atención a la discapacidad es un órgano:

a) De carácter no permanente.
b) Encargado de promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
c) Técnico, dependiente del Observatorio Estatal de la Discapacidad.
d) Encargado de la recopilación, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.

113.- Según el artículo 66 del texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las medidas contra la discriminación podrán consistir en exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables. A efectos de determinar si un ajuste es razonable:

a) Se tendrán en cuenta los costes de la medida.
b) No se tendrán en cuenta los costes de la medida.
c) Se podrán tener en cuenta los costes de la medida.
d) Únicamente se tendrán en cuenta los costes de la medida.

114.- Según el artículo 1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, la presente ley tiene por objeto regular la transparencia y publicidad en la actividad pública, entendiendo esta como:

a) La desarrollada en el ejercicio de potestades administrativas.
b) La desarrollada por una Administración Pública.
c) La desarrollada por el sector público.
d) La desarrollada con una financiación pública.

115.- Conforme al artículo 51 ter de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el instrumento principal a través del cual se establecen los objetivos y las líneas básicas del Sistema de integridad institucional de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público se denomina:

a) Programa marco de integridad institucional y prevención de riesgos de gestión.
b) Código ético institucional del sector público autonómico.
c) Plan de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude
d) Sistema interno de información en el sector público autonómico.

116.- Señálese la respuesta INCORRECTA con relación a la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante de acuerdo con el capítulo IV del Título II de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno:

a) Se adscribe al Valedor do Pobo.
b) Ejercerá sus funciones con plena autonomía e independencia, sin que en ningún caso pueda recibir indicaciones o instrucciones de cualquier órgano, autoridad pública o entidad privada.
c) Se rige por lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en lo que le resulte de aplicación, y por lo dispuesto en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno y en la correspondiente normativa de desarrollo.
d) Estará presidida por la persona titular del Valedor do Pobo y tendrá como vocales a la persona titular de la Consellería Mayor del Consello de Contas, la persona titular de la Presidencia del Consello Galego de Relacións Laborais, la persona titular de la Presidencia del Consello Consultivo de Galicia y la persona titular de la Secretaría General del Valedor do Pobo, que ejercerá las funciones de secretario o secretaria, con voz y voto.

117.- Señálese cuál de las siguientes NO es una sanción por infracción muy grave en el ámbito de las sanciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, conforme al artículo 59 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno:

a) La destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado en los mismos.
b) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente.
c) La inhabilitación para ocupar un puesto de alto cargo de las personas que hayan cometido las infracciones consistentes en el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, conflictos de intereses y abstenciones, durante un periodo de entre uno y cinco años.
d) Una sanción pecuniaria por un importe de entre un mínimo del cinco por ciento y un máximo del diez por ciento de su salario bruto mensual.

118.- Frente a las resoluciones en materia de acceso a la información pública y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno:

a) Cabe recurso potestativo de reposición ante órgano que la hubiere dictado o bien recurso contencioso-administrativo.
b) No cabe reclamación sino recurso contencioso-administrativo, cuando procedan del Presidente de la Xunta de Galicia.
c) No cabe reclamación sino directamente recurso contencioso-administrativo, cuando sean dictadas por el Consello Galego de Relacións Laborais.
d) Únicamente cabe recurso contencioso-administrativo.

119.- Respecto a la información sobre ordenación del territorio y medio ambiente a la que hace referencia el artículo 18.2 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, será objeto de publicación:

a) La clasificación y calificación del suelo.
b) La normativa urbanística.
c) Las resoluciones e informes que en el ejercicio de sus potestades y competencias emitan la Xunta de Galicia y los órganos que, en su caso, ejercen competencias sobre urbanismo.
d) La información relativa a los convenios urbanísticos que se suscriban.

120.- Sobre las limitaciones del derecho de acceso a la información pública según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno:

a) El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado o denegado de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la ley.
b) Las limitaciones deberán ser proporcionadas atendiendo al interés general.
c) Las limitaciones al derecho de acceso solo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o mientras se mantenga la razón que las justifique.
d) Todas las respuestas son falsas.

121.- Sobre el derecho de acceso a la información pública establecido en el artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, señale la respuesta INCORRECTA.

a) El procedimiento se iniciará con la presentación de la solicitud que deberá dirigirse a la persona titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
b) La persona solicitante tiene derecho a recibir orientación y asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través del Sistema integrado de atención a la ciudadanía.
c) Para fomentar la presentación de las solicitudes por vía electrónica, la Administración ofrecerá a la ciudadanía, a través del Portal de transparencia y Gobierno abierto de Galicia, modelos normalizados de solicitud.
d) La persona solicitante está obligada a motivar su solicitud de acceso a la información.

122.- De acuerdo con el artículo 27 apartados 4 y 5 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, qué afirmación es correcta:

a) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá dictarse en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud.
b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá dictarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
c) Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
d) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hubiesen solicitado, lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

123.- Según el artículo 8 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, señale cuál de las siguientes informaciones está incluida entre las obligaciones específicas de información sobre las relaciones con la ciudadanía:

a) Las delegaciones de competencias vigentes.
b) El régimen jurídico de los distintos servicios públicos.
c) Los planes de actuación y contratos de gestión de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
d) La localización de las unidades administrativas, medios de contacto y horario de atención al público.

124.- Según el artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos e intereses de terceros:

a) El órgano encargado de resolver les concederá un plazo de un mes para que puedan formular alegaciones.
b) El traslado de la solicitud a la persona afectada no producirá la suspensión del plazo para resolver.
c) El traslado de la solicitud a la persona afectada producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o transcurra el plazo concedido para su presentación.
d) El órgano encargado de resolver les concederá un plazo de diez días para que puedan formular alegaciones.

125.- Señálese la respuesta INCORRECTA con relación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

a) Se le adjudica el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación.
b) Actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.
c) Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y un mínimo de siete vocales.
d) Estará dividido en un mínimo de dos Secciones, que estarán presididas por el propio presidente del Tribunal, quien podrá delegar el ejercicio de la función en uno de los vocales que integren la Sección, y formadas por uno o más vocales y el Secretario General.

126.- Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación al objeto del contrato, cuando el órgano de contratación hubiera decidido proceder a la división en lotes del objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora, siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de ciertos requisitos. Señálese el INCORRECTO:

a) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación. Dicha previsión deberá concretar la combinación o combinaciones que se admitirá, en su caso, así como la solvencia y capacidad exigida en cada una de ellas.
b) Que se trate de supuestos en que no existan varios criterios de adjudicación.
c) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.
d) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.

127.- De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato. Conforme a ese precepto, ¿en qué plazo deberá realizarse esa publicación?

a) Quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
b) En un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
c) En un plazo de un mes tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.
d) Quince días tras la formalización.

128.- Conforme al artigo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cuál de los siguientes plazos es correcto:

a) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra.
b) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.
c) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.
d) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

129.- Conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, relativo a las medidas cautelares en el recurso especial en materia de contratación, el órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares dentro de:

a) Los cinco días naturales siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
b) Los dos días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
c) Los dos días naturales siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.
d) Los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.

130.- Con relación a la ejecución del contrato de obras, el artículo 239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, establece que en casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del contrato. Señálese cuál de los siguientes supuestos NO se califica por la ley como de fuerza mayor:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
c) La subida brusca del precio de las materias primas o de la energía.
d) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

131.- En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

a) No podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) No podrá ser inferior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) No podrá ser superior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
d) No podrá ser inferior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

132.- De conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las generales:

a) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.
b) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro mayor.
c) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.
d) Todas son falsas.

133.- De conformidad con lo establecido en el artículo 302 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público respecto de la ejecución de un contrato de suministro, por razones técnicas o económicas podrá establecerse que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar el siguiente porcentaje:

a) 20 % del precio total.
b) 25 % del precio total.
c) 50 % del precio total.
d) Tal disposición no está prevista en relación a los contratos de suministro.

134.- Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, señale cuál de las siguientes menciones NO forma parte del contenido mínimo del contrato:

a) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
b) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
c) El responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
d) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.

135.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a la subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos de obra según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.

a) Cuando el contratista, en cualquier momento, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía.

b) Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, se minorará el precio del contrato de elaboración del proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel.

c) El contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel.

d) La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto.

136.- Según el artículo 82 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la clasificación de las empresas:

a) Tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión.

b) Tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por idéntico plazo.

c) Tendrá una vigencia anual, prorrogable por idéntico plazo hasta un máximo de cinco años.

d) Tendrá una vigencia de diez años.

137.- Señálese la opción INCORRECTA con relación a los medios y período de prueba conforme a lo establecido por el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
b) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
c) Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
d) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

138.- Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente:

a) La Administración podrá acordar la suspensión general de plazos de los procedimientos administrativos.
b) La Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.
c) La Administración deberá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos.
d) La Administración deberá acordar la suspensión general de plazos de los procedimientos administrativos.

139.- Según lo que establece el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, relativo al cómputo de plazos, cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa:

a) Se considerará hábil en todo caso.
b) Se considera inhábil para el interesado.
c) Se considerará inhábil en todo caso.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

140.- Señálese la respuesta INCORRECTA con relación a los instrumentos de terminación convencional del procedimiento administrativo común, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

a) Deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia.
b) Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, cuando versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
c) No supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, sin perjuicio de que puedan alterar las responsabilidades que corresponderían a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
d) Deben publicarse o no, según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.

141.- Respecto a la práctica de la prueba regulada en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas:

a) En el plazo de 10 días.
b) En el plazo de 15 días.
c) Con antelación suficiente.
d) En el plazo de 7 días.

142.- Conforme al artículo 106.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué afirmación es correcta?

a) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, previo Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

b) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

c) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado recursos contencioso-administrativos en cuanto a otras solicitudes sustancialmente iguales.

d) Todas las anteriores son falsas.

143.- Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cada Administración deberá mantener:

a) Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a los procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

b) Un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a trámites finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

c) Un archivo electrónico único de los documentos públicos administrativos válidamente emitidos, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

d) Un archivo electrónico único en el que se almacenen los documentos públicos administrativos.

144.- Según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, sobre el cómputo de plazos en los registros:

a) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, que será fijado por Real Decreto.

b) El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.

c) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días naturales, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo sin que sea preciso comunicar la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos a quien presentó el documento.

145.- Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá el desistimiento por la Administración, que declarará concluso el procedimiento.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la suspensión del plazo.

c) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción.

d) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

146.- Señálese la opción INCORRECTA con relación al régimen jurídico de los Subsecretarios conforme al artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

a) Ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes y ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes.
b) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
c) Habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
d) El nombramiento ha de efectuarse entre funcionarios de carrera, en situación de servicio activo, del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al subgrupo A1.

147.- Señale la respuesta INCORRECTA en relación a los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

a) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que será un miembro del propio órgano.
b) Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento.
c) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
d) Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

148.- En relación a la responsabilidad penal en la que pudiera incurrir el personal al servicio de las Administraciones Públicas según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

a) La exigencia de responsabilidad penal suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan en todo caso.
b) La responsabilidad penal derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, pero no la responsabilidad civil.
c) La exigencia de responsabilidad penal suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
d) La responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

149.- Según el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Conferencia de Presidentes:

a) Puede ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.
b) Estará asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma.
c) Está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, estando asistida por el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto.
d) Adoptará sus decisiones en forma de acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento.

150.- Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas:

a) Se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
b) Se almacenarán en el mismo formato a partir del que se originó el documento.
c) Se almacenarán en el mismo formato a partir del que se originó el documento, salvo cuando no sea posible.
d) Se almacenarán en el Archivo General de documentos.

SEGUNDA PARTE. SUPUESTO PRÁCTICO

TEXTO 1

La Consellería de Economía e Industria tramita durante 2026 un proyecto denominado Centro Galego de Intelixencia Artificial, que se ubicará en un edificio de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia. El inmueble estaba adscrito a la Consellería de Cultura, aunque llevaba años sin utilización efectiva. Ante la urgencia del proyecto, el secretario general técnico de Economía e Industria autoriza mediante oficio interno la ocupación inmediata del edificio por la Agencia Gallega de Innovación, sin esperar a la tramitación del correspondiente expediente patrimonial por la Consellería de Facenda e Administración Pública (la competente en materia de patrimonio).

Paralelamente se licita un contrato de suministro de equipamiento tecnológico por importe de 12 millones de euros. El gasto se distribuye entre los ejercicios 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Durante la tramitación del expediente se comprueba que la aplicación presupuestaria inicialmente prevista resulta insuficiente, siendo el crédito disponible de 3 millones de euros. El órgano gestor propone minorar una partida destinada a gastos declarados ampliables dentro del mismo capítulo II del presupuesto de la Consellería de Economía e Industria para transferir los fondos a la aplicación del proyecto.

Por otra parte, la Intervención Delegada formula reparo señalando que los límites aplicables a los compromisos plurianuales resultan superados y que la transferencia proyectada podría afectar a créditos sometidos a restricciones legales.

Durante una revisión posterior se detecta que la Administración dejó de reclamar en 2020 una deuda de 180.000 euros derivada del reintegro de una subvención. Desde el 15 de julio de 2022 no consta actuación administrativa alguna dirigida al cobro.

151.- ¿Qué consecuencia debería derivarse de la falta de utilización efectiva del bien por la Consellería de Cultura, si esta no ha hecho constar de modo alguno la no utilización del inmueble?

a) Se produce la desadscripción del inmueble de forma automática por el transcurso de más de un año sin utilización.
b) La consellería que pretende utilizar el inmueble (Economía e Industria) debe recabar información de la Consellería de Cultura para comprobar si existe algún proyecto de actuación. En caso contrario, podrá instar una mutación demanial a su favor.
c) La Consellería de Facenda e Administración Pública, debe recabar la información y, si constata la no utilización y la ausencia de proyecto de actuación, podrá desadscribir o desafectar el inmueble.
d) Se produce la desafectación del inmueble de forma automática por el transcurso de más de un año sin utilización.

152.- La Agencia Gallega de Innovación ocupa el edificio sin haberse tramitado expediente alguno por la Consellería de Facenda e Administración Pública. Al respecto, cabe señalar que:

a) La ocupación resulta válida porque no existe alteración de la titularidad dominical del inmueble.
b) La ocupación podría ser materialmente posible, pero la situación jurídica del bien no varía en tanto no se produzca formalmente el acto de adscripción.
c) La adscripción previa a Cultura queda extinguida por su falta de utilización durante más de un año.
d) La autorización del secretario general técnico, seguida de la ocupación, demostrada la urgencia de la necesidad de ocupar el inmueble, equivale a un supuesto de adscripción tácita.

153.- ¿Cabría mantener la adscripción a la Consellería de Cultura y establecer un régimen de adscripción compartida del inmueble con la de Economía e Industria?

a) Sí, dado que la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia contempla la adscripción compartida.
b) No, porque la adscripción compartida requiere utilización efectiva por ambas consellerías y exige una limitación temporal máxima de dos años.
c) No, porque la adscripción compartida requiere, además de la justificación de la necesidad de uso por la Consellería de Cultura, una autorización previa de la Consellería de Facenda e Administración Pública, previa comunicación conjunta de las dos consellerías interesadas y que la de Economía e Industria tenga la necesidad de adscripción por un período inferior a un año.
d) Sí, siempre que se autorice previamente por la Consellería de Facenda e Administración Pública, previa comunicación de las dos consellerías interesadas y que la Consellería de Economía e Industria tenga la necesidad de adscripción por un período inferior al año.

154.- Teniendo en cuenta el crédito disponible en la partida en la que se prevé la realización del gasto plurianual, determine el importe máximo por anualidad y, en consecuencia, la suficiencia de la previsión.

a) 3 millones para 2026; 2,1 para 2027; 1,8 para 2028; 1,5 para 2029 y 2030. En consecuencia, suman 9,9 millones de euros y no permitirían cubrir el gasto proyectado.
b) 3 millones para 2026; 2,7 para 2027; 2,4 para 2028; 2,1 para 2029 y 2030. En consecuencia, suman 12,3 millones de euros y podría cubrirse el gasto proyectado.
c) 3 millones para 2026; 2,4 para 2029; 2,1 para 2028 y 1,8 para 2029 y 2030. En consecuencia, suman 11,1 millones de euros y no permitirían cubrir el gasto proyectado.
d) 3 millones para 2026; 2,4 para 2029; 2,1 para 2028 y 2 para 2029 y 1,8 para 2030. En consecuencia, suman 11,3 millones de euros y no permitirían cubrir el gasto proyectado.

155.- El órgano gestor propone financiar el proyecto mediante una transferencia desde una partida declarada ampliable. ¿Es viable la propuesta?

a) Sí, cualquier crédito puede minorarse mediante transferencia.
b) Con carácter general, no, puesto que los créditos ampliables no pueden ser afectados por transferencias de créditos.
c) Sí, siempre que exista ahorro presupuestario neto en los términos de la normativa sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
d) Sí, si existe informe favorable de Tesorería, como alternativa a la anulación de remanentes.

156.- Prescindiendo de la viabilidad de la transferencia de crédito, y teniendo presentes los datos del enunciado, ¿a quién correspondería acordar la modificación presupuestaria?

a) Al Consello de la Xunta.
b) Al Conselleiro de Economía e Industria.
c) Al Conselleiro de Facenda e Administración Pública.
d) Al Presidente de la Xunta.

157.- La Intervención Delegada formula reparo por considerar improcedente la transferencia. ¿Qué efectos tiene el reparo y cómo debe procederse en caso de existir discrepancia por parte del ente gestor?

a) Se anula la transferencia y se finaliza el procedimiento.
b) Tiene efectos suspensivos y ante la discrepancia debe remitirse el expediente a la Consellería de Facenda e Administración Pública, a cuyo titular corresponderá resolver el expediente.
c) Tiene efectos suspensivos y ante la discrepancia debe remitirse el expediente al Consello de la Xunta, al que corresponderá resolver el expediente.
d) Puede continuarse con la modificación presupuestaria sin otras actuaciones, sin perjuicio de que en el posterior control realizado por el Consello de Contas pueda derivarse responsabilidad por parte del ente gestor.

158.- La Intervención aprecia que se superan los porcentajes máximos autorizados para anualidades futuras. ¿Tiene algún efecto sobre el contrato celebrado?

a) Sí, deja sin efecto el contrato por no existir dotación presupuestaria.
b) No, la superación carece de relevancia mientras exista crédito suficiente en los ejercicios futuros.
c) No, aunque será necesaria la habilitación legal o autorización prevista normativamente para excepcionar los límites.
d) No, salvo autorización expresa del Consello de la Xunta, previo informe favorable de la Intervención General y del Consello de Contas.

159.- Con relación al reintegro de la subvención del año 2020 se indica que desde el 15 de julio de 2022 no se ha realizado ninguna acción administrativa dirigida al cobro. ¿Puede considerarse prescrita la obligación de reintegro?

a) Sí, porque han transcurrido cuatro años sin ejercitar acciones dirigidas al cobro.
b) No, porque no han transcurrido los cinco años de prescripción que determina el Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre.
c) Se ha cumplido el plazo de prescripción desde entonces y la administración no lo ha interrumpido, pero podría no haber prescrito la deuda.
d) El reintegro de subvenciones es imprescriptible, según su normativa específica.

160.- Si finalmente se considerase prescrita la obligación de reintegrar la subvención, ¿qué consecuencias se derivarían de ello?

a) El derecho se dará de baja en cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la inactividad administrativa.
b) La eventual prescripción afecta únicamente al deudor y no puede proyectar efectos sobre la actuación administrativa.
c) El derecho se dará de baja en cuentas, sin perjuicio de que el obligado pueda, voluntariamente, realizar el reintegro.
d) La prescripción implica la pérdida de eficacia de todos los actos realizados, pero la Administración podría volver a iniciar el procedimiento orientado al cobro del reintegro.

TEXTO 2

D. Pedro F.V. es funcionario de carrera, del cuerpo superior de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

D. Pedro ocupa un puesto dependiente de la Consellería de Facenda, en la Subdirección de Procesos Selectivos. Por razón de sus funciones, el funcionario tiene acceso a determinada información que, por orden expresa de sus superiores jerárquicos no puede difundir, para preservar la transparencia y legalidad de los procesos selectivos que organiza la mentada Subdirección.

D. Pedro F.V., a la vista de que su sobrina participará en el proceso selectivo convocado para el subgrupo A1, decide hacerle ciertos comentarios que permiten guiar el estudio de la opositora hacia ciertas preguntas que pueden ser objeto del ejercicio tipo test.

La indiscreción de la sobrina de D. Pedro F.V., hace que la revelación de estos datos corra como la pólvora en las academias y centros de preparación de oposiciones. Asimismo, los superiores jerárquicos del funcionario se enteran también de la situación. Las organizaciones sindicales también se hacen eco de esta circunstancia.

161.- Los superiores jerárquicos de D. Pedro F.V. se plantean abrir un expediente disciplinario. No obstante, desean previamente realizar una suerte de investigación para comprobar la certeza de los hechos y otros posibles implicados. Le consultan a usted acerca de esta posibilidad:

a) No es posible. Las actuaciones de investigación tienen que realizarse en el marco del procedimiento.
b) Es legalmente admisible ya que, con anterioridad a la iniciación del procedimiento, podrán realizarse actuaciones previas al objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.
c) Es contrario a Derecho. La constatación de los hechos susceptibles de constituir una infracción administrativa debe conllevar la inmediata iniciación del procedimiento disciplinario.
d) No solo es legalmente posible, sino que es preceptivo que, antes del inicio del expediente, se lleven a cabo estas averiguaciones.

162.- El expediente disciplinario contra D. Pedro F.V. se abre el día 8 de septiembre de 2025, lunes. El instructor duda acerca de la calificación de los hechos. Cuál de las siguientes opciones es la más correcta?

a) Falta leve: La negligencia en la custodia de secretos oficiales.
b) Falta muy grave: El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
c) Falta grave: La publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
d) Falta muy grave: La publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

163.- El instructor aprecia la comisión, presuntamente, de un posible delito tipificado en el art. 417 del Código Penal. ¿Qué debe hacer el instructor?

a) El instructor carece de autoridad para apreciar hechos que puedan revestir carácter de delito, al amparo del art. 192.5 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia. Debe continuar la tramitación.
b) Suspender el procedimiento y ponerlo en conocimiento de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.
c) Suspender el procedimiento y ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
d) Suspender el procedimiento y ponerlo en conocimiento del órgano judicial correspondiente.

164.- Se inician diligencias penales por los hechos, a raíz de la denuncia de uno de los sindicatos que tuvieron noticia de aquellos. El instructor decide acordar la suspensión provisional de D. Pedro F.V. Señale, acerca de esta actuación por parte del instructor, cuál de las siguientes aseveraciones es correcta:

a) La suspensión provisional de funciones es una medida que debe ser acordada por el órgano judicial.
b) La suspensión provisional solo podrá declararse cuando en el procedimiento penal se acuerde la prisión provisional u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo.
c) Podrá ser declarada motivadamente por el tiempo durante el cual mantenga dicha condición, si así lo justificara la naturaleza de los hechos imputados.
d) Durante el período de suspensión, el funcionario conservará las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

165.- El proceso penal, para dicha de D. Pedro F.V., concluye tres meses después con un auto de sobreseimiento. El instructor le plantea cuál de las siguientes opciones es la más acorde a lo previsto en el art. 184.4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia, una vez que existe un auto firme de sobreseimiento.

a) Este auto carece de relevancia, ya que solo las sentencias judiciales firmes vinculan en cuanto a los hechos y consecuencias jurídicas.
b) Las resoluciones judiciales firmes, tanto autos como sentencias, vinculan en cuantos a los hechos.
c) Las resoluciones judiciales firmes, tanto autos como sentencias, vinculan en cuantos a los hechos y su calificación jurídica.
d) Este auto carece de relevancia, ya que es absolutorio.

166.- El procedimiento disciplinario discurre de la siguiente forma: se dictó el acuerdo de inicio el día 8 de septiembre de 2025, D. Pedro F.V. presentó alegaciones al mismo, se practicaron las pruebas pertinentes y, posteriormente, se dictó la propuesta de resolución. Una vez notificada ésta a D. Pedro F.V., el interesado formula alegaciones a la propuesta de resolución y solicita la nulidad del expediente porque, a su entender, no se le ha informado de sus derechos en el curso del procedimiento. ¿Qué derechos ostenta en exclusiva atención al art. 193 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia?

a) A participar en la práctica de la prueba.
b) A la asistencia letrada.
c) A no confesar contra sí mismo.
d) Todas las alternativas son ciertas.

167.- En sus alegaciones a la propuesta de resolución, D. Pedro F.V., ante una eventual sanción, se plantea renunciar a su condición de funcionario. ¿Qué efectos tendría esta proclamación de su voluntad sobre el expediente?

a) Su terminación.
b) La caducidad.
c) No afecta al expediente disciplinario.
d) El expediente disciplinario continuará hasta su conclusión. Sin embargo, la resolución sancionadora devendrá nula al tener un contenido imposible, al amparo del art. 47.1.c) de la Ley 2/2015, de 29 de abril, de empleo público de Galicia.

168.- Al tiempo de dictar la resolución, el órgano responsable se percata de que no comparte el criterio del órgano que formula la propuesta de resolución, en cuanto a la calificación de los hechos. Considera que se adecúa mejor una infracción de mayor gravedad y, en definitiva, distinta de aquella por la que se instruyó el expediente.

a) No es legalmente admisible modificar la calificación.
b) Es legalmente admisible esta operación, siempre que los hechos sean los mismos.
c) Es legalmente admisible, siempre que se motive.
d) La propuesta de resolución tiene carácter vinculante.

169.- Si el acuerdo de inicio data de 8 de septiembre de 2025, señale en qué fecha caducaría el expediente:

a) 8 de septiembre de 2026.
b) 8 de marzo de 2026.
c) 8 de diciembre de 2025.
d) 9 de diciembre de 2025.

170.- Si los hechos tuvieron lugar a lo largo de las dos primeras semanas de agosto de 2025; durante las cuales, D. Pedro F.V. coincide con su sobrina en la casa familiar de Oleiros hasta el 19 de agosto de 2025, fecha en la que el denostado funcionario se reincorpora a su puesto de trabajo y pierde contacto con su sobrina. ¿Cuándo prescribiría la sanción por la eventual falta grave -recuerde que esta calificación no condiciona la respuesta de las anteriores preguntas- que se le impuso en virtud de Resolución administrativa firme de 10 de mayo de 2026?

a) El 19 de agosto de 2027.
b) El 19 de agosto de 2028.
c) El 10 de mayo de 2028.
d) El 19 de agosto de 2026.

171.- Una vez cumplida la sanción, D. Pedro F.V. insta su cancelación. El órgano responsable decide anotar en el Registro personal de funcionario la sanción impuesta por falta grave -recuerde que esta calificación no condiciona la respuesta de las anteriores preguntas-. El día en que se procede a realizar la mencionada operación, el responsable percibe que D. Pedro F.V. había sido sancionado por hechos similares en relación con un proceso selectivo anterior. Señale la opción correcta:

a) Una vez cumplida la anotación puede ser cancelada.
b) D. Pedro debe esperar dos años.
c) D. Pedro debe esperar cuatro años.
d) Resulta improcedente, por contrario a la intimidad y dignidad de D. Pedro, que se perpetúe en un Registro la comisión de una infracción que ya ha cumplido. El órgano administrativo debió proceder de oficio a su cancelación.

TEXTO 3

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, pretende iniciar un plan piloto para que todos los municipios de Galicia puedan disponer de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), para ello, encarga a un organismo autónomo adscrito a ella la contratación de un servicio, de carácter intelectual y especial complejidad, consistente en la redacción de las directrices técnicas y algunos documentos para que esos concellos puedan iniciar los trámites de la redacción de sus PGOU. El número de municipios para este plan piloto será de siete municipios de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Ourense, que no dispongan de PGOU.

Datos:

a. **3 municipios de entre 2.500 y 5.000 habitantes.**
b. **4 municipios inferiores a 2.500 habitantes.**

Precios unitarios:

a. **Para los municipios de 2.500-5.000 habitantes el importe máximo será de 55.000 € cada uno sin IVA (máximo: 165.000 €)**
b. **Para los municipios inferiores a 2.500 habitantes el importe máximo será de 40.000 € cada uno sin IVA (máximo: 160.000 €).**

Importe total sin IVA: 325.000,00 €

IVA (21%): 68.250,00 €

Importe total con IVA: 393.250,00 €

El plazo fijado para dicho servicio es de 2 años.

Distribución de anualidades:

2026: 41.500,00 €

2027: 162.000,00 €

2028: 121.500,00 €

Criterios de adjudicación:

- **Criterios no evaluables de forma automática, criterios relacionados con la calidad: 50 puntos (50 %)**
- **Criterios evaluables de forma automática: 50 puntos (50 %). (políticas de conciliación 10 puntos y precio 40 puntos).**

Procedimiento sujeto a regulación armonizada.

172.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto y lo previsto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál es el presupuesto base de licitación?

a) 393.250,00 €.
b) 325.000,00 €.
c) 162.500,00 €.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

173.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto y lo previsto en el artículo 101 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, cual es el valor estimado del contrato?

a) 393.250,00 €.
b) 325.000,00 €.
c) 162.500,00 €.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

174.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto y lo previsto en el artículo 160.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, el procedimiento especialmente adecuado por tratarse de un servicio intelectual de especial complejidad será el:

a) Procedimiento abierto.
b) Procedimiento restringido.
c) Procedimiento negociado con publicidad.
d) Procedimiento negociado sin publicidad.

175.- ¿Se podría utilizar la subasta electrónica en este contrato, según lo previsto en el artículo 143.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público?

a) Sí, siempre.
b) Sí, porque solo se valoran criterios automáticos.
c) No.
d) Sí porque el valor estimado supera el umbral comunitario.

176.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto y al tipo de procedimiento fijado en la pregunta 174, el plazo de presentación de las proposiciones, teniendo en cuenta que el órgano de contratación permite la presentación de la documentación por medios electrónicos, según el artículo 164 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público:

a) Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.
b) Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no será inferior a veinticinco días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.
c) Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no será inferior a quince días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.
d) Será el suficiente para la adecuada elaboración de las proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso, no será inferior a veinte días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.

177.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto, al tipo de procedimiento fijado en la pregunta 174 y lo previsto en el artículo 145.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿los criterios no evaluables de forma automática, relacionados con la calidad, están correctamente fijados?

a) Sí.
b) Sí, si solo se valoran criterios no automáticos.
c) No, deben representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
d) No, deben representar, al menos, el 60% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas.

178.- Atendiendo a los datos que figuran en el supuesto, al tipo de procedimiento fijado en la pregunta 174 y lo previsto en el artículo 145.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿está correctamente distribuido el reparto de los puntos en los criterios de adjudicación?

a) La distribución de los porcentajes de los criterios no evaluables de forma automática no tienen ninguna limitación en la ley.
b) El porcentaje de los criterios evaluables de forma automática no es correcto.
c) El porcentaje de los criterios no evaluables de forma automática no es correcto.
d) La distribución de los porcentajes de los criterios relacionadas con la calidad no tienen ninguna limitación en la ley.

179.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que presente la documentación justificativa de que dispone de los medios que se comprometió a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber constituido la garantía definitiva, que se hará, según establece el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el plazo de:

a) 10 días.
b) 10 días hábiles.
c) 7 días.
d) 7 días hábiles.

180.- En el caso de no cumplir con el requerimiento señalado en la pregunta anterior en plazo, según establece el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público:

a) Se entiende que el licitador retira su oferta.
b) Se le exige el 5% del presupuesto base de licitación.
c) Se le exige el 2% del presupuesto base de licitación
d) Se le exige el 3% del Valor estimado.

PREGUNTAS DE RESERVA. PRIMERA PARTE

181.- Según el preámbulo de la Constitución, "la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de" (señálese la INCORRECTA):

a) Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
b) Consolidar un Estado Social y Democrático de Derecho que asegure la representación de la voluntad popular.
c) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
d) Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

182.- Atendiendo al art. 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con relación a la asistencia de secretarios de Estado o altos cargos a las reuniones del Consejo de Ministros:

a) Podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España.
b) Asistirán los Secretarios de Estado en todo caso y excepcionalmente otros altos cargos cuando así lo exija lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España.
c) Podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin otras limitaciones.
d) Podrán asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados, pero no los altos cargos.

183.- Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.º y 13.º de la Constitución la competencia exclusiva de las siguientes materias:

a) La artesanía.
b) Las ferias y mercados interiores.
c) Agricultura y Ganadería.
d) Establecimientos farmacéuticos.

184.- Señale la opción INCORRECTA con relación a la toponimia, a tenor de lo establecido por el artículo 10 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística:

a) Los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.
b) Corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia.
c) El nombre de las vías urbanas será determinado por el Ayuntamiento correspondiente.
d) Las denominaciones en gallego son las legales a todos los efectos y la rotulación tendrá que concordar con ellas, sin perjuicio del mantenimiento de aquellas formas castellanas de amplia tradición en la Comunidad Autónoma, cuya fijación corresponderá realizar por Decreto del Consello de la Xunta.

185.- De conformidad con el artículo 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando un órgano de este orden jurisdiccional aprecie de oficio la falta de jurisdicción:

a) Declarará la inadmisión del recurso sin más trámite, al tratarse de una cuestión de orden público.
b) Resolverá previa audiencia de las partes por plazo común de diez días, pudiendo prescindirse de la intervención del Ministerio Fiscal cuando ninguna de las partes alegue la falta de jurisdicción.
c) Resolverá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días y, si la demanda se presenta posteriormente ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de un mes, se entenderá presentada en la fecha inicial, siempre que concurran los requisitos previstos en la ley.
d) Remitirá directamente las actuaciones al órgano jurisdiccional competente, conservándose en todo caso la fecha inicial de interposición del recurso.

PREGUNTAS DE RESERVA. SEGUNDA PARTE

186.- Con relación a las mutaciones demaniales de bienes y derechos de titularidad de la Administración general de la Comunidad Autónoma afectados al cumplimiento de los fines o servicios de las consellerías o entidades públicas instrumentales, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2023, de 2 de noviembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, señálese la respuesta correcta sobre la competencia:

a) Será acordada de oficio por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio mediante orden, a iniciativa propia o a petición de la consellería o entidad interesada, previo informe de la consellería o entidad a la que estuvieran adscritos los bienes o derechos.
b) Será acordada de oficio por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio mediante orden, a propuesta conjunta de las entidades u órganos interesados.
c) Será acordada de oficio por la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio mediante orden, a iniciativa propia o a petición de la consellería o entidad a la que estuvieran adscritos los bienes o derechos, previo informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
d) Será acordada de oficio por el Consello de la Xunta mediante decreto, a iniciativa propia o a petición de la persona titular de la consellería competente en materia de patrimonio, previo informe de la consellería o entidad a la que estuvieran adscritos los bienes o derechos.

187.- Conforme a la exposición de motivos de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, esta ley se dicta en función de diversos títulos competenciales y preceptos constitucionales y estatutarios. Señálese cuál de los siguientes NO aparece mencionado a tal fin en la norma:

a) Los artículos 27.1 y 28.1 del Estatuto de autonomía de Galicia.
b) Los artículos 15.4 y 16.4 del Estatuto de autonomía de Galicia.
c) El artículo 149.1.18ª de la Constitución Española.
d) El artículo 148.1.2ª de la Constitución Española.

188.- Atendiendo a la Disposición Adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece las medidas dirigidas al control de la temporalidad en el empleo público, el incumplimiento del plazo máximo de permanencia dará lugar a una compensación económica para el personal funcionario interino afectado. Señálese la opción INCORRECTA del régimen jurídico de dicha compensación:

a) Será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
b) El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo.
c) La cuantía estará referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento.
d) No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.

189.- De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en el caso de pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento:

a) No se producirá la pérdida de la condición de personal funcionario, prevaleciendo la situación en el momento del nombramiento.
b) Se producirá la pérdida de la condición de personal funcionario, sin perjuicio de que si de forma simultánea se adquiere la nacionalidad de alguno de dichos estados pueda continuar prestando servicios como personal eventual.
c) Se producirá la pérdida de la condición de personal funcionario, salvo que de forma simultánea se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos estados.
d) Se producirá la pérdida de la condición de personal funcionario, sin perjuicio de que si de forma simultánea se adquiere la nacionalidad de alguno de dichos estados pueda producirse un nuevo nombramiento como personal funcionario.

190.- Señálese la opción INCORRECTA con relación a la suspensión de plazos administrativos en los acuerdos de declaración de zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil establecida en la Disposición Adicional novena de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

a) La suspensión de los plazos será consecuencia automática del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, previsto en el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
b) Se suspenderán los plazos para el cumplimiento de los trámites de los procedimientos administrativos del sector público que correspondan a los interesados residentes en los términos municipales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo y, en su caso, a aquellos otros interesados que acrediten el carácter imposible o gravoso de su cumplimiento en atención a los efectos de la emergencia.
c) La suspensión se mantendrá hasta el momento en que se dicte un nuevo acuerdo de Consejo de Ministros decretando la finalización de esta medida.
d) Tras el acuerdo de finalización los plazos suspendidos se reanudarán.

PREGUNTAS DE RESERVA. SEGUNDA PARTE.

SUPUESTO PRÁCTICO

191.- TEXTO 3.- Atendiendo a los datos del supuesto y a lo establecido en el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, la formalización del contrato:

a) No podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
b) Deberá efectuarse no más tarde de los 15 días siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
c) Deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
d) No podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

192.- TEXTO 3.- Atendiendo a los datos del supuesto y a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿este contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación?

a) Los contratos de servicio de carácter intelectual no son susceptibles de recurso especial.
b) Sí.
c) No.
d) Ninguna respuesta es correcta.

193.- TEXTO 3.- Según el artículo 158.2 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público, el plazo máximo para efectuar la adjudicación, si no se estableció otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, será de:

a) Un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
b) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.
c) Un mes a contar desde la apertura de las proposiciones que contengan criterios no automáticos.
d) Dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones que contengan criterios no automáticos.